

JURISPRUDENCIA AMBIENTAL EN CATALUÑA
(SEGUNDO SEMESTRE 2019)

AITANA DE LA VARGA PASTOR
Profesora Agregada
Universitat Rovira i Virgili

Sumario: 1. Una visión general; 1.1. Planeamiento urbanístico y evaluación ambiental; 1.2. Los instrumentos económicos ambientales, en especial el canon del agua;

1. UNA VISIÓN GENERAL

Durante este periodo el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) se ha pronunciado en varias sentencias en las que se han dirimido cuestiones relacionadas con el medio ambiente, resolviendo recursos contencioso-administrativos y recursos de apelación. Especialmente destacan en el marco de los recursos contencioso-administrativos los ámbitos de la intervención administrativa, como son la planificación urbanística vinculada a la evaluación ambiental y los instrumentos económicos ambientales, en particular, el canon del agua.

Durante este periodo también encontramos numerosas sentencias en las que se dirime sobre las asociaciones cannábicas en el municipio de Barcelona.¹ No obstante, en tanto que ya analizamos en anteriores crónicas sentencias similares y al tratarse más de cuestiones urbanísticas que estrictamente ambientales hemos considerado oportuno no analizarlas. Lo mismo sucede con las numerosas sentencias del mismo municipio que encontramos en relación con los conflictos con licencias y usos turísticos². Por último, encontramos sentencias relativas a medidas cautelares por falta de autorización y suspensión de licencia ambiental que resuelven recursos de apelación que referenciamos pero que no hemos considerado suficientemente relevantes para comentarlas.³

1.1. Planeamiento urbanístico y evaluación ambiental.

En este espacio queremos destacar aquellas sentencias en las que el Plan urbanístico se ha declarado nulo o se ha pretendido su nulidad por falta o por vicio en la evaluación ambiental a la que debe someterse. Queremos hacer

¹ Referenciamos las sentencias a continuación por si son de interés: SSTSJC número 311/2019 de 8 de abril; 426/2019 de 14 de mayo; 437/2019 de 21 de mayo; 465/2019 de 27 de mayo; 495/2019, de 4 de junio; 562/2019, de 17 de junio; 567/2019, de 17 de junio; 586/2019, de 25 de junio;

² Las sentencias pronunciadas sobre esta cuestión en este periodo son: SSTSJC número 313/2019 de 8 de abril; 427/2019 de 14 de mayo; 466/2019 de 27 de mayo; 496/2019 de 4 de junio; 451/2019 de 21 de mayo; 544/2019 de 12 de junio; 613/2019 de 28 de junio; 684/2019 de 9 de julio;

³ Se trata de las SSTSJC número 310/2019 de 5 de abril; 344/2019 de 18 de abril; 40172019 de 7 de mayo; 622/2019 de 3 de julio.

especial referencia a dos sentencias que dirimen sobre la aprobación definitiva de modificación del POUM de Alcover por considerarlas relevantes al analizar las figuras de planeamiento tanto el de ordenación urbanística municipal como el plan territorial parcial, así como la institución del evaluación ambiental. Por último, comentaremos una sentencia en la que se considera que la evaluación ambiental es adecuada a la legalidad.

Las sentencias número 534/2019 y 535/2019 de 11 de junio resuelven recursos contencioso administrativos interpuestos contra la Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de Alcover, contra acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Tarragona, de 29 de noviembre de 2012 que aprueba definitivamente el POUM de Alcover y contra la Resolución del Director General d'Ordenació del Territori i Urbanisme de fecha 14 de enero de 2013 en el que se da conformidad al Texto Refundido del citado POUM, pidiendo la declaración de la nulidad de dichos actos y dejándolos sin efecto en todo aquello que se refiere al Sector de la Romiguera, por no ser conforme a derecho. La aprobación del POUM pretendía cambiar el uso ecológico de una zona de uso extractivo, con el agravante de que la actividad extractiva ya se venía ejerciendo anteriormente.

El primer recurso incide más que el segundo en los incumplimientos en el proceso de evaluación ambiental correspondiente a la ampliación del área extractiva en el siguiente sentido, en el FJ 2:

“II.- INCOMPLIMENTS EN EL PROCÉS D'AVALUACIÓ AMBIENTAL CORRESPONENT A L'AMPLIACIÓ DE L'ÀREA EXTRACTIVA. (...)

(...) s'entén, que pel que fa a la legislació sectorial, l'ampliació de la pedrera requereix d'un estudi d'impacte ambiental, que plantegi alternatives de creixement. (...)

(...) Es considera que donada la magnitud de l'ampliació proposada que és de 64,03 ha respecte les 84,75 ha existents, que en total sumen una extensió de 148,78 ha, l'ISA hauria d'haver proposat alternatives de creixement que valoressin de forma preliminar la comparativa de les afectacions que aquestes alternatives ocasionen al medi. Les alternatives han d'estudiar els aspectes més significatius per al medi ambient com són les possibles ubicacions en la ampliació, els efectes que té una extensió més gran o més

petita, la programació de la ampliació per fases i la seva viabilitat econòmica, la distància a nuclis de població i les seves possibles afectacions, etc.

Tanmateix cal afegir, que si bé és cert que l'ISA de la segona aprovació inicial, a l'apartat 5 Sensibilitat ambiental, analitza la sensibilitat ambiental dels terrenys objecte d'ampliació de l'àrea extractiva, no en considera les conclusions que n'extreu, doncs la major part del sector d'ampliació situat al sud de l'actual, és considerada com a zona d'elevada sensibilitat ambiental i/o com a zona de sensibilitat mitjana. Es considera correcte aquesta valoració feta per l'ISA, ja que aquests terrenys corresponen a la conca del Torrent del Ferreró. (veure plànol 3 acompanyat).

Per tant, i en conclusió, s'han d'estudiar altres alternatives i en tot cas desclassificar tota la zona sud del Torrent del Ferreró com a zona d'ampliació de la Pedrera, per ser una zona de connexió ecològica, entre altres motius objectivables que se citen en les alegacions següents.

En definitiva, se considera que no se han estudiado suficientemente las alternativas a la ampliación de la zona extractiva además de que la zona en la que se pretende realizar la ampliación es una zona de conexión ecológica que requiere continuar con ese uso y, por lo tanto, no procede a cambiar el uso a extractivo.

En la contestación de la demanda la Generalitat de Catalunya defiende el cambio de uso, considerando que es acorde a la legalidad alegando lo que sigue en el FJ2:

- en alegaciones a la información pública del POUM la titular de la explotación codemandada instaba que se tuviera en cuenta que tenía en tramitación ante la Administración sectorial competente en materia de minas una petición para su ampliación;
- entre los informes sectoriales a la primera aprobación inicial del POUM se hallaba uno desfavorable del Departament d'Economia i Finances (Serveis Territorials a Tarragona), a cuyo tenor, de la regulación de las actividades extractivas que contenía el POUM se desprendía una prohibición genérica, contraria al art. 122 de la Ley de Minas, de nuevas actividades extractivas, así como de la ampliación de las existentes, habiendo de permitir la normativa del POUM ambas posibilidades;
- el informe de la Oficina de Gestió Ambiental Unificada estima que la ampliación de la zona de explotación no comporta un aumento del impacto

ambiental de la actividad, similar al provocado por la actual explotación, y que la ampliación no se encuentra situada dentro de ningún espacio incluido en el PEIN, ni en la Red Natura 2000;

-se emitió igualmente informe de adecuación del POUM al planeamiento territorial por el Departament de Territori i Sostenibilitat;

-los terrenos en que se prevé la posibilidad de ampliación de la cantera se califican con la clave 26a-"ús extractiu, ampliació", hallándose la misma regulada en el art. 186;

-el POUM se sometió al preceptivo procedimiento de evaluación ambiental estratégica;

-inadmisibilidad del recurso por falta de acreditación de la capacidad procesal del Consistorio recurrente, al no haber decidido ejercer la acción el Pleno de la Corporación, o el Alcalde, y no haberse emitido el preceptivo informe jurídico previo por el Secretario municipal, de la Asesoría Jurídica, o de un Letrado;

-el POUM de Alcover se ajusta al Plan Territorial Parcial del Camp de Tarragona (en adelante, en su caso, PTPCT): el POUM se limita a otorgar a los terrenos una determinada calificación urbanística, pero la ampliación propiamente dicha de la actividad extractiva requiere en todo caso las preceptivas autorizaciones sectoriales, minera, ambiental integrada, y urbanística; el art. 2.18 de las normas de ordenación del PTPCT prevé expresamente que en los suelos de protección especial cabe autorizar nuevas actividades extractivas y ampliaciones de las ya autorizadas siempre que no afecten de forma clara y definitiva los valores que han motivado la protección especial o territorial del conjunto del espacio; el instrumento adecuado para valorar si se da o no aquella condición es el acto de autorización de la actividad o proyecto en cuestión; en el proceso de evaluación ambiental estratégica del POUM se han identificado ya las repercusiones ambientales de la clave urbanística en litigio, desde la perspectiva propia de esta fase de planeamiento, descartándose que se produzca una afectación clara y definitiva de los valores que motivan la especial protección por razones de ordenación territorial;

-estricto cumplimiento del procedimiento de evaluación ambiental estratégica del POUM, sin perjuicio de la ulterior evaluación ambiental específica del proyecto de ampliación de la cantera;

-el hecho de que el planeamiento territorial catalogue una parte de los terrenos como suelo de protección especial por razón de su conectividad

ecológica no impide al POUM otorgarles la calificación urbanística impugnada, ni la desvirtúa;

-falta de afectación significativa del valor de conectividad ecológica de los terrenos: la mera catalogación por el PTPCT de los terrenos como de protección especial por razones de ordenación territorial, y concretamente por su función conectora, no desvirtúa la calificación urbanística, que se limita a hacerlos compatibles con la posibilidad de su destino al uso extractivo, siendo en sede de la correspondiente autorización sectorial donde se comprobará si el contenido del proyecto cumple o no la condición impuesta por el art. 2.18 PTPCT; las medidas correctoras se incorporan explícitamente a la propia normativa del POUM, imponiendo su art. 186 la obligación de cumplir las medidas correctoras del documento de informe de sostenibilidad ambiental; el valor territorial de conectividad ecológica de los terrenos es limitado o residual, hasta el punto de que el destino de los terrenos al uso extractivo no significaría una afectación significativa del tal valor territorial; los mismos se ubican en una amplia franja de terreno situada entre dos áreas verdaderamente conectoras, en uno de los extremos de aquella franja intermedia, justo en el límite de los terrenos que ya no cumplen tal función, y que no tienen ningún valor territorial por tal motivo; de hacerse efectiva la posibilidad de ampliación de la cantera, quedaría sometida por imperativo legal a la preceptiva obligación de restauración de los terrenos afectados, agotado el aprovechamiento minero, permitiendo aquella restaurar los valores territoriales y ambientales de los terrenos y en concreto su valor conector, por lo que no nos hallamos ante una afectación definitiva;

-la evaluación ambiental estratégica del POUM también examinó favorablemente el impacto paisajístico de la eventual ampliación de la cantera; y

-la calificación urbanística resulta perfectamente compatible con la protección de los bienes culturales y naturales de la zona.

Los mismos motivos de inadmisibilidad y desestimación del recurso contencioso administrativo enarbola el Ayuntamiento codemandado.

La titular de la explotación demandada también expone su defensa de la legalidad, en el mismo sentido.

La sentencia también incorpora los extremos que resultan de interés de las periciales de designación judicial practicada i que reproduce los FFJJ 4, 5 y 6 a las que nos remitimos. En el FJ 7 se plasman los preceptos del Plan Territorial Parcial del Camp de Tarragona que se toman en cuenta.

Reproducimos a continuación los FFJJ 8 y 9 en los que se argumenta la estimación del recurso y por consiguiente la declaración de nulidad de pleno derecho de la Aprobación definitiva con prescripciones y conformidad al Texto Refundido del POUM de Alcover en cuanto a la regulación del uso extractivo en ampliación de cantera existente, llamada "La Ponderosa", en la superficie de 64,03 Ha, clave 26a, así como al art. 186 de sus normas. El Tribunal entiende, por lo tanto, que el Plan Territorial vincula al plan derivado y que no permite dicho cambio de uso ya que el uso ecológico debe mantenerse por tratarse de un suelo de protección especial por su valor como conector ecológico y el cambio de uso afectaría este valor ambiental protegido i que la evaluación ambiental que se ha realizado no es correcta, ya que las medidas correctoras del ISA son insuficientes y no se han tenido en cuenta las afectaciones al agua ni los valores ambientales que existen que deben ser protegidos así como la función de conector que ejerce.

“OCTAVO- La impugnación que en el presente supuesto se nos somete requiere, en orden a su enjuiciamiento, partir de la referencia normativa en el precedente fundamento traída a literal colación, para tomar de ella las siguientes pautas que al POUM le son en lo que aquí importa de aplicación: el sistema de espacios abiertos señala las partes del territorio a preservar de los procesos que puedan afectar negativamente sus valores paisajísticos y ambientales; tal sistema es un componente fundamental en la ordenación del territorio, siendo las determinaciones que lo regulan básicas en el despliegue del PTPCT; las normas relativas a aquel sistema en el PTPCT son de aplicación directa, y ejecutivas, desde su entrada en vigor, prevaleciendo sobre el planeamiento territorial sectorial y urbanístico vigente en todos aquellos aspectos en que puedan ser más restrictivas en relación a la implantación de actividades que puedan afectar a los valores del suelo que motivan su protección (lo que no puede entenderse sino como un claro llamamiento al planeamiento urbanístico futuro, no exclusivamente a autorizaciones, como pretende la recurrida, en virtud del principio de

coherencia que disciplinan los arts. 3.3 y 13.2 del Decret Legislatiu 1/2010, TRLUC, y 11.4 de la Llei 23/1983, de 21 de noviembre, de Política Territorial); es suelo de protección especial aquél que por sus valores naturales y de conectividad ecológica el Plan considera más adecuado para integrar una red permanente y continua de espacios abiertos, que ha de garantizar la biodiversidad y vertebrar el conjunto de espacios abiertos; en relación con las actuaciones en suelo de especial protección que se pueden autorizar al amparo de los apartados cuarto y sexto (a que se refiere la titular de la explotación) del art. 47 TRLUC, se entiende que son incompatibles con aquel suelo todas aquellas actuaciones de transformación del mismo que puedan afectar de forma clara los valores que motivan la protección especial; en relación a las actividades extractivas, se pueden autorizar las ampliaciones de la ya autorizadas en suelo de protección especial siempre que no afecten de forma clara y definitiva los valores que han motivado la protección especial del conjunto del espacio protegido; en fin, las propuestas de nuevas actividades extractivas han de ponderar desde el análisis multicriterio los valores naturales y ambientales frente al valor de los bienes mineros objeto de explotación.

El Ayuntamiento recurrente, en demanda, pone de manifiesto que la ampliación propuesta se efectúa sobre el Torrent den Ferreró, que ejerce de conector biológico entre la plana del Camp y el espacio de interés natural de Muntanyes de Prades, suponiendo aquélla una barrera que aumentaría la fragmentación del territorio, provocando un aislamiento del espacio natural protegido; que la conectividad actualmente se garantiza siguiendo la dirección de los cursos de rieras, torrentes y barrancos que bajan de la montaña a la planicie, haciendo disminuir la ampliación litigiosa la conectividad y biodiversidad tanto del espacio protegido como de los espacios abiertos de la planicie; que dada la magnitud de la ampliación propuesta debieron de proponerse alternativas de crecimiento que valorasen de forma preliminar la comparativa de afectaciones que las mismas ocasionaren al medio; que si bien es cierto que el informe de sostenibilidad ambiental (en adelante, en su caso, ISA) analiza la sensibilidad ambiental de los terrenos objeto de ampliación, no deduce conclusiones de la elevada y media sensibilidad ambiental que atribuye al suelo de la ampliación; que se destruirán hábitats de interés comunitario; y que pese a que el Torrent den Ferreró no tenga un caudal continuo, su

desaparición afectará a ecosistemas dependientes del agua, aguas abajo de la Font del Mas Roig.

El cuadro descrito por la actora bastaría, de acreditarse, a los efectos de arrastrar la nulidad de la disposición aquí discutida, por contrariarse claramente las determinaciones que para el suelo que nos ocupa, en relación con la concreta actividad de que se trata, sientan, sin ánimo exhaustivo, los arts. 2.7.2, 2.18.2 y 2.18.4 del PTPCT, y seguirse una evaluación ambiental del Plan inadecuada e inidónea a los fines que le son propios.

Sin perjuicio de valorar los argumentos desplegados en contestación a la demanda por recurrida y codemandados, el resultado de las dos pruebas periciales de designación judicial aquí practicadas, a mayor garantía del acierto de la decisión que nos compete, no viene sino a abonar las tesis de la recurrente.

Así, el perito, Sr. Roque , mantiene que parte de la ampliación propuesta se efectúa sobre el Torrent den Ferreró, que ejerce de conector biológico entre la Plana del Camp y el espacio de interés natural de Montañas de Prades, incluido en la Red Natura 2000; que la ampliación supondría una barrera que aumentaría la fragmentación del territorio, dificultando la conectividad de los diferentes espacios naturales protegidos establecidos en red y su conexión hacia los terrenos situados en la llanura del Camp de Tarragona; que ésta es una de las pocas zonas más amplias y abiertas entre las montañas y la llanura; que la ampliación, interceptando la cuenca del Torrent den Ferreró, vulnera los valores ambientales que han propiciado la inclusión del mismo como suelo de especial protección, aumentando la presión sobre los valles vecinos en el citado papel conector, en una zona muy estrecha para la conectividad ecológica; que la conectividad entre las montañas de Prades y la Plana es fundamental en la visión del PTPCT, en orden a la continuidad física entre los paisajes naturales y los modificados por el ser humano; que la solución adoptada por el ISA es hidráulica pero no ecológica, no pudiendo separarse el lecho de la vegetación de ribera que lo rodea, y de las zonas húmedas o las llanuras de inundación que los complementan; que hay un espacio de interés natural y su conexión con la llanura se adelgaza debido a los polígonos industriales de Alcover y de la Selva, no haciendo más que reducirlo la ampliación de la zona extractiva; que ya la anteriores Normas Subsidiarias de Alcover calificaban el suelo de la ampliación como especialmente protegido de interés ecológico-ambiental,

no pudiendo conforme a aquéllas acoger utilizaciones que implicaren transformaciones de su destino o naturaleza, con prohibición de cualquier actividad extractiva; que el problema radica en la magnitud de la ampliación de la zona extractiva, desproporcionada; y que las medidas correctoras del ISA son insuficientes, en tanto que la visión de los espacios fluviales no se limita a la zona por donde discurre el agua.

De la credibilidad de lo concluido por el perito da buena cuenta la extensión de sus razonados argumentos, habiéndose el mismo prestado a respuestas exhaustivas a las aclaraciones que le fueron solicitadas por las partes, así como la aquilatada experiencia en la formación de las correspondientes evaluaciones ambientales de distintos instrumentos de planeamiento. Más allá de lo cual, como se verá de inmediato, y resulta de la misma literalidad de su pericial arriba traída a colación, tenemos que el otro perito designado, a petición de la codemandada comparecida a iniciativa de este Tribunal, titular de la explotación, Sr. de Sebastián, no viene sino a abundar en la afectación clara, definitiva, e irreversible, de valores que motivaron la especial protección territorial del suelo que nos ocupa.

Este último perito, por más que templado en su conclusión final, no viene sino a aportar conclusiones que apuntan aquella irreversibilidad de la negativa afectación a valores ambientales y de conectividad ecológica del suelo sobre el que se proyecta la ampliación de la cantera: así, sostiene que en el ámbito se detecta la presencia de hasta cuatro hábitats de interés comunitario; que el ámbito presenta una considerable biodiversidad; que los valores naturales y ambientales del ámbito se pueden considerar elevados; que el total de especies protegidas de presencia posible es de sesenta; que el valor de la fauna y la flora es alto; que el Torrent den Ferreró funciona como conector biológico entre el espacio de interés natural de las Muntanyes de Prades, incluido en la Red Natura 2000, y la Plana del Camp; que pudiendo considerarse un conector de segundo orden, su funcionalidad es significativa; que la actividad proyectada supondrá una profunda transformación del paisaje y del ecosistema, modificándose el relieve y los flujos de agua, los sedimentos y los nutrientes, y desapareciendo del suelo de forma prácticamente total, con sus componentes, así como la vegetación y gran parte de la fauna; que el carácter del impacto mencionado será permanente, porque el programa de restauración no permitirá la recuperación de la integridad de algunos de los elementos principales del paisaje asociados al relieve actual; que dos de los hábitats de interés

comunitario serán parcialmente destruidos, incluido el suelo y la morfología del terreno sobre el que se asientan; que cuando cese la actividad, aun aplicando el programa de restauración estrictamente (luego, en el escenario más favorable para la posición de recurrida y codemandados), los ecosistemas o los hábitats, por su complejidad, difícilmente se podrán reconstruir a partir de cero; que el resultado será un nuevo paisaje, con unas plataformas de grandes dimensiones en que los riscos que flanquean el torrente habrán sido rebajados a cotas significativamente más bajas; que al cese de la actividad, y completado el programa de restauración, no será posible recuperar los ecosistemas o hábitats previos; y que el resultado será un mosaico de sectores, algunos severamente alterados, que reducirán drásticamente la permeabilidad ecológica del conector, siendo previsible que, a la restauración, éste recupere parte (no toda) su funcionalidad.

Merecedora igualmente de crédito la citada pericial, de resultado no discrepante, en su cuerpo y argumentación, de hecho, con la primera, tenemos que la afectación clara y definitiva a los valores que motivan la especial protección territorial concurre, no viniendo a ponerle remedio íntegro y cabal una eventual restauración, simultánea o sucesiva a la explotación. No desconocemos el tenor de las respuestas a las aclaraciones planteadas, en el sentido que interesó a la parte que las propuso, por el perito, en escrito de fecha 27 de octubre de 2017, más del mismo no estimamos una refutación de lo anteriormente concluido, en la medida en que las breves respuestas consignadas no contradicen la absoluta incertidumbre de una reconstrucción de los valores esenciales y característicos de los hábitats afectados, ni el impacto sobre el paisaje, en lo que a la significativa rebaja de cota de los riscos y modificaciones profundas del relieve a consecuencia de la actividad extractiva se refiere. En suma, caracterizadas con detalle por el perito, Sr. de Sebastián, las afecciones a los valores ambientales y de conectividad del ámbito de ampliación, su significación, y su imposible reversión, en un horizonte avizorable, en extremos en nada accidentales, las breves respuestas a las aclaraciones pedidas no dejan de revelarse opiniones que, por más que complacientes con la posición de la parte que las plantea, en nada desvirtúan en núcleo de la pericia, y los impactos en ella descritos.

De cuyo resultado probatorio no ha de entenderse sino digna de estimación la pretensión de nulidad articulada en el escrito de demanda.”

NOVENO.- Abordando las razones desplegadas por la adversas, y comenzando por las articuladas por la Generalitat de Catalunya, en contestación a la demanda, habremos de alcanzar las siguientes conclusiones:

Que la zona de ampliación no se halle encuadrada en ningún espacio de interés natural, ni en la Red Natura 2000, no desvirtúa su condición de suelo de especial protección territorial, con el régimen tuitivo de los valores del mismo a aquella asociado, hallándonos de hecho ante un suelo que ejerce funciones de corredor ecológico al servicio de espacio de interés natural integrado en aquella Red.

El POUM se dice sometido a un proceso de evaluación ambiental estratégica de cuya idoneidad y suficiencia, a los fines de justificar la ordenación aprobada para nuestro ámbito de ampliación de uso extractivo, cabe fundadamente dudar, a la vista del resultado de la pericial practicada, obra del Sr. Roque. Así, el mismo ha venido a poner de manifiesto que no se plantean alternativas de ampliación a zonas de protección preventiva, en su caso compatibles con el uso propuesto; que el ISA se limita a hacer una relación de posibles efectos significativos, sin valorarlos en debido modo; que falta un análisis de alternativas exhaustivo, que valore la comparativa de afectaciones que las citadas alternativas ocasionen al medio, para una afectación superficial superior a las veinticinco hectáreas (aquí son sesenta y cuatro); que en ningún documento se valora o intenta justificar la ausencia de afectación clara y definitiva a valores que justificaron la especial protección territorial; que el ISA se limita a una relación de efectos significativos del plan sobre el medio ambiente, sin interrelacionar los aspectos con incidencia ambiental; que entre el primer y el segundo ISA se dan contradicciones, determinando el primero como severa la incidencia de una pequeña ampliación de la zona extractiva en la alternativa de modelo 4, y no haciéndolo así el segundo ISA, para la ampliación que nos ocupa, que supone de hecho cuasi duplicar la extensión superficial de la explotación minera; que la contradicción con el ISA inicial se da en conceptos muy sensibles por lo que hace la ampliación, tales como "Prats Basòfils", "Connector", "Recursos fluvials", "Paisatge", "Criteris ambientals i objectius" o "Alternatives"; que el segundo ISA no evalúa el impacto, a diferencia del primero, que estudia diferentes alternativas; o que con ocasión de la

evaluación ambiental del proyecto técnico de la ampliación sólo se valorarán alternativas internas. De cuya pericial colegimos, sin dudas, que la evaluación ambiental del POUM, en lo que a la ampliación litigiosa se refiere, no ha cumplido su función, inhibiéndose de un estudio riguroso de alternativas de ampliación para centrarse, exclusivamente, en una relación de los efectos de la ubicación ya decidida para la misma, y de previsión de medidas correctoras de los mismos, más propio, este contenido, de la sede de evaluación de impacto ambiental de la actividad.

De hecho, de la lectura del informe a la segunda aprobación inicial, emitido por la Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental (folios 4558 y ss. del expediente administrativo), tenemos que, reconocido que toda la zona queda englobada dentro de área de interés faunístico o florístico, se apela a las medidas correctoras que incluye el ISA, reveladas insuficientes, estipuladas, a mayor reproche, por el Departament competente en materia de agricultura y ganadería, allí donde las mismas habrían de reconducirse al competente en materia ambiental. A la sazón, ya aquel informe echa en falta "una avaluació a nivell municipal de les activitats extractives, amb la corresponent valoració d'alternatives", justamente el principal reproche dirigido a la evaluación ambiental del POUM por el perito Sr. Roque.

En la contestación de la Administración autonómica se repite, hasta la saciedad, un argumento cuasi obsesivo: que el POUM no viene a implantar o alumbrar actividad alguna, sino a prever una calificación que la hace simplemente posible, habiendo de deferirse la exhaustiva evaluación ambiental a la sede de autorización de la actividad. El argumento no merece la consideración de esta Sala, en la medida que, en sede de planeamiento, desde luego, ha de practicarse una evaluación ambiental que informe en debido modo la labor del planificador, a quien corresponde decidir, ni más ni menos, que una calificación que permitirá actividades como la que nos ocupa, allí donde le han de caber distintas opciones, y no se debe sino a un ejercicio de la potestad respetuoso con la ordenación territorial, de entrada, lo que aquí no ha acontecido. Lo diremos en otras palabras: no cabe inhibir la evaluación ambiental propia del planeamiento para deferirla a la sede de una autorización ya reglada, en que constituirá elemento central la evaluación del impacto de la actividad en una determinada ubicación, no otra, en orden a minimizar aquél. Siendo así que a ambos peritos ha resultado perfectamente plausible un análisis de las consecuencias ambientales de la decisión planificadora aquí discutida a la vista de la

ordenación aprobada, consecuencias radicalmente incompatibles con la disciplina territorial marcada por el PTPCT, lo que al planificador, de ejercer rectamente su potestad, hubiera resultado igualmente asequible.

De las periciales practicadas han resultado igualmente refutadas las invocaciones de la recurrida a hallarnos ante una falta de afectación significativa al valor de conectividad ecológica de los terrenos; a lo residual del valor territorial de conectividad (argumento éste, por cierto, que supone cuestionar de modo impropio la virtualidad misma de una ordenación territorial que se revela molesta a los efectos de defender la legalidad del POUM); o aun a permitir la restauración, agotado el aprovechamiento minero, restaurar los valores territoriales y ambientales de los terrenos, y en concreto su valor conector.

En fin, al valorar la representación autonómica el resultado de la segunda de las periciales practicadas en autos, viene la misma a cuestionar que al cese de una actividad extractiva pueda devolverse el suelo a su original situación, habiendo de entenderse ello consustancial a cualquier actividad de tal naturaleza. A lo que bien podrá oponerse que, informada como lo está al respecto esta Sala, conocedora de la realidad y consecuencias de explotaciones como la de autos, la ordenación territorial demanda respeto, en sus estrictos términos, siendo así que las afectaciones derivadas de la actividad, a su cese y restauración, merced a las periciales practicadas, en modo alguno pueden estimarse sino significativas, con incidencia sustancial y nuclear incuestionable en los valores de nuestro ámbito, incluido el conector, que en parte no desdeñable habrían de quedar irremediabilmente desnaturalizados.”

El segundo recurso, que tiene el mismo objeto que el recurso anterior, considera que la actividad extractiva que se desarrolla en estos terrenos es ilegal y que se ha promovido la modificación del plan para “legalizar” la actividad cambiando el uso del suelo calificado de especial protección donde se prohíbe el uso extractivo a uso extractivo. Se considera además que la actividad que se ejerce está amparada por una licencia ambiental nula de pleno derecho “al permitir la explotación minera sobre unos terrenos no compatibles con el uso extractivo, calificados como suelo especialmente protegido de interés ecológico-ambiental por las NNSS de Alcover y catalogados por el Plan Territorial Parcial de Tarragona (como se verá más adelante) como suelo de protección especial.”

También se alega que el Plan Territorial parcial del Camp de Tarragona aprobado definitivamente el 12 de enero de 2010, cataloga el ámbito del POUM de la zona de la Romiguera objeto de ampliación de la cantera como sòl de protecció especial (mitad occidental) y como sòl de protecció preventiva, espais d'interés connector (sector Este). También se alegan infracciones en cuanto a la evaluación ambiental del plan.

La parte demandada sin embargo considera que la aprobación del plan es correcta.

El Alto Tribunal ciñe su análisis a la cuestión relativa al Planeamiento urbanístico, es decir al POUM que es el objeto del recurso y para ello se refiere a una sentencia previa alegando lo siguiente "Tales extremos han sido abordados en sentencia de esta Sala y Sección, recaída en el recurso seguido ante la misma bajo el número 28/2013 , contra idéntico instrumento de planeamiento, del día de la fecha, en base a un acervo probatorio del que se dio oportuno traslado a las partes, para alegaciones, por providencia de esta Sala, de fecha 2 de octubre de 2018." Se reproduce casi la integridad de la sentencia, en los fragmentos que le interesa, a la que se remite para llegar a la siguiente conclusión, expuesta en el FJ5:

De los anteriores razonamientos fluye diáfana la concurrencia en el POUM de vicios determinantes de su nulidad, corroborando acaso la conclusión de una indebida evaluación ambiental del POUM, al menos en lo que al ámbito litigioso se refiere, la misma pericial de que se valen aquí los actores, obra del Sr. Lorenzo, acompañada al escrito de demanda, a cuyo tenor, en lo que aquí importa:

"Un dels aspectes que IISA fa especial èmfasi és la connectivitat ecològica (pàgines 88 a 94). El municipi d'Alcover, al límit de les Muntanyes de Prades, té un enclavament especial per a garantir la connectivitat ecològica entre aquest espai natural i la plana del Camp de Tarragona. A través de torrents i rius com el Glorieta, es vehicula aquesta connectivitat tant (sic) necessària per a garantir la pervivència dels ecosistemes naturals de la zona.

Si bé IISA detalla els diferents elements que poden limitar aquesta connectivitat (carreteres, urbanitzacions, vies de tren, etc.), no es parla de l'efecte devastador sobre la connectivitat que fa la pedrera i tota la seva àrea.

LISA aporta la informació sobre connectivitat que el Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona va posar sobre la taula després de la aprovació definitiva el 2010. (...) Fer aquestes consideracions objectives en base al Pla Territorial, però després considerar possible l'ampliació de la pedrera de La Ponderosa, entenem que no té sentit i resta coherència a IISA. (...)

(...) IISA exposa l'impacte de les activitats extractives sobre el municipi. Després d'una relació de les pedreres abandonades i les que actualment estan en actiu i que, per tant, són susceptibles de generar algun tipus d'impacte, hi ha una mancança molt greu de detall de quins són els impactes generats. (...)

(...) la memòria tampoc inclou en l'anàlisi d'alternatives, l'opció d'ampliació de La Ponderosa (pàgina 32).

Tot aquest anàlisi de la memòria, ens porta a constatar que no hi ha hagut una adaptació dels documents de la memòria corresponents a la primera aprovació inicial. El text refós presentat, no difereix gaire de la primera proposta i no incorpora el principal canvi: 'l'ampliació de la pedrera de La Ponderosa. Així doncs, afirmem que la memòria presentada és invàlida, esbiaixada i presenta greus dèficits de contingut, ja que al menysprear l'ampliació de la pedrera en varis (sic) capítols, no preveu els possibles efectes d'aquesta sobre la resta de planejament i ordenació del municipi. Tan sols en trobem una breu referència a la pàgina 56, quan es descriu la clau 26 i 26a del SNU. (...)

(...) 3.3. Annex a Informe de Sostenibilitat Ambiental del POUM d'Alcover (...)

(...) L'objecte d'aquest Annex és, com s'indica a la pàgina 5, canviar la catalogació de l'àrea de l'ampliació de la pedrera, de sòl rural i sòl d'interès ecològic i paisatgístic, a sòl per a ús extractiu. Malgrat tot, no existeix una justificació argumentada per aquest canvi de catalogació. Els valors que al seu dia van motivar l'interès ecològic i paisatgístic segueixen vigents abans com ara, el document no contraposa la situació passada amb l'actual de manera que es pugui comprendre una rebaixa dels valors ambientals de la zona.

Novament, com ja s'ha vist en altres documents ambientals del POUM, l'annex a IISA destaca que l'espai on s'ha de fer l'ampliació de la pedrera és important pel que fa a la connexió ecològica (pàgina 8 i pàgines 30 i 31), fet que va justificar que el Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona delimités la zona com a sòl de protecció especial"

Como se ve, la pericial de que se valen los recurrentes en los presentes autos abunda en reproches a la evaluación ambiental del POUM, a la que se atribuye incoherencia al no contemplar en debido modo el efecto o impacto sobre la conectividad ecológica del área, que se reconoce y describe, de la actividad extractiva; no estudiar rigurosamente alternativas en cuanto a la ampliación litigiosa; y ausencia de justificación bastante de un cambio de calificación allí donde la anterior atendía al interés ecológico y paisajístico del ámbito en liza.

Luego, de la prueba en los presentes autos practicada resulta nuevamente acreditada aquella insuficiencia e inidoneidad de la evaluación ambiental del POUM, al menos en lo concerniente a la clave de ampliación de uso extractivo litigiosa.

Por todas cuyas razones, añadidas a las relacionadas en el fundamento precedente, no ha sino de estarse a la estimación del recurso contencioso administrativo, en lo relativo a la pretensión de nulidad del POUM en cuanto a la regulación del uso extractivo en ampliación de cantera existente, clave 26a, según será de ver en el fallo de la presente.

En definitiva, se estima el recurso y declara nula de pleno derecho en cuanto a la regulación del uso extractivo en ampliación de cantera existente, llamada "La Ponderosa", en la superficie de 64,03 Ha, clave 26a, así como al art. 186 de sus normas.

La tercera sentencia que analizamos en este apartado, en cambio, desestima la pretensión de la parte actora. La sentencia número 316/2019 de 8 de abril resuelve recurso contencioso administrativo que tiene por objeto acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de la Cataluña Central, de 3 de marzo de 2016, de aprobación definitiva de la Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Sant Fruitós de Bages, para la adaptación a la Llei 16/2009, de centros de culto (en adelante, en su caso, MPPGO). Se impugna la modificación del art. 96, que permite el uso religioso en áreas de suelo industrial -clave 6- en el ámbito definido por el plano de ordenación de la MPPGO, que se concreta únicamente en un polígono industrial del municipio, la Bòbila. Se alegan varias vulneraciones, entre ellas, que en la MPPGO no se seguido la obligación de elaborar un informe de sostenibilidad ambiental preliminar, conforme a la Llei 6/2009, de evaluación ambiental de planes y

programas. Después de practicar la prueba por parte de perito y analizar los distintos extremos y pretensiones que se plantean el tribunal decide desestimar el recurso. En lo que nos atañe esgrime la siguiente argumentación en el FJ 6:

En fin, se reserva un mínimo apartado del escrito de demanda (dos párrafos al folio 134 de los autos, apartado 1.9 del llamado hecho primero de aquel escrito) para denunciar la que se califica de vulneración del art. 86 bis del TRLUC. A tenor de éste "la evaluación ambiental de los instrumentos de planeamiento urbanístico que estén sometidos a la misma de acuerdo con la legislación en materia de evaluación ambiental de planes y programas se integra en el procedimiento de elaboración de los planes urbanísticos, de conformidad con la presente ley y con el reglamento que la desarrolla" (apartado primero). Si la parte actora no pone en absoluto su alegato en relación con aquella legislación en materia de evaluación ambiental de planes y programas, para poner de manifiesto en virtud de qué concreta previsión normativa de ésta entendía la modificación de planeamiento general de que se trata sujeta a una evaluación ambiental no observada, el motivo de impugnación aparece muy insuficientemente desarrollado. Este Tribunal negó a la parte codemandada, que no a la actora, pregunta a la arquitecta municipal acerca de la no sujeción de la MPPGO a evaluación ambiental de planes y programas, por entender la cuestión, en los términos en que se formulaba, de puro derecho, a lo que aquí podremos añadir que, vista la insuficiente técnica impugnatoria observada por la actora, no versando en ningún caso la prueba pericial propuesta por la misma acerca del impacto o repercusión ambiental de la MPPGO, y atendiendo esta Sala a lo informado por la arquitecta municipal sobre el contenido de la MPPGO, en el sentido de no implicar el uso admitido un mayor impacto sobre las personas y otras actividades que el resto de los admitidos, no podemos tener por suficientemente alegada, ni acreditada, al margen de lo anterior, burla a la legislación sobre evaluación ambiental de planes y programas en la elaboración de la MPPGO.

En último lugar, exponemos la sentencia número 401/2019 de 7 de mayo resuelve recurso de apelación contra la sentencia número 253, de fecha 26 de septiembre de 2017, que desestimaba dicho recurso. En este caso se trata de un Plan Especial que se considera nulo por faltar la correspondiente evaluación ambiental, lo que conlleva también la nulidad de los actos administrativos

derivados de dicho plan. De esta sentencia cabe destacar su FJ5 en el que se afirma lo siguiente:

No obstante lo hasta aquí dicho, como las partes conocen, al haberlo sido también en el recurso ordinario antes citado como seguido ante esta misma Sección con el número 243/2015, recayó en él la ya citada sentencia número 57, de 28 de enero de 2.019 , que ha sido declarada firme por diligencia de ordenación de la Sra. Letrada de la Administración de Justicia de 30 de abril pasado, en la que se anuló el plan especial para la implantación de este mismo circuito por falta de la correspondiente evaluación ambiental estratégica.

Lo que es determinante de la nulidad de la propia licencia otorgada a su amparo, pues el artículo 47.4 del Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto , texto refundido de la Ley de Urbanismo de Cataluña, permite que el suelo no urbanizable pueda ser objeto de actuaciones específicas para destinarlo a las actividades o los equipamientos de interés público que se tengan que emplazar en el medio rural (entre ellos los destinados a actividades colectivas de carácter deportivo, cultural, de educación en el tiempo libre y de recreo que se desarrollen en el aire libre, con las obras e instalaciones mínimas e imprescindibles para el uso de que se trate), exigiendo el 48.1 que tanto el proyecto como el plan especial urbanístico al efecto formulado reúnan determinadas condiciones que en el caso del plan especial, como declaró la indicada sentencia firme, no se dieron, lo que deja sin cobertura jurídica suficiente a la licencia de autos, que deber por ello ser anulada.

Por lo tanto, la nulidad del plan especial por falta de evaluación ambiental arrastra la nulidad de la licencia objeto del recurso.

1.2. Los instrumentos económicos ambientales, en especial el canon del agua.

Durante este periodo el TSJC ha resuelto varios recursos contencioso-administrativos relativos a tributos y a instrumentos económicos de carácter ambiental. Queremos destacar particularmente las tres sentencias en las que se ha analizado el canon del agua. Se trata de las SSTSJCS número 562/2019, de 20 de junio, 570/2019 de 21 de junio, y 615/2019 de 4 de julio. En los tres

recursos se analiza la naturaleza de este canon del agua creado como ingreso específico de la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) con la naturaleza jurídica declarada de impuesto con finalidad ecológica, que afecta al uso del agua facilitada por las entidades suministradoras y la procedente de captaciones de aguas superficiales y subterráneas cuya gestión corresponde al ACA. En el primer recurso se cuestiona dicha naturaleza en las instalaciones para la producción de energía hidroeléctrica. También se considera que vulnera el derecho comunitario europeo, en concreto la Directiva de responsabilidad medioambiental (2004/35/CE y la Directiva 23000/60/CE al no existir daños contaminantes. También se alega la inconstitucionalidad del tributo por vulnerar los arts. 133.2 CE y apartados 2 y 3 del art. 6 de la LOFCA.

En lo que concierne a la naturaleza del tributo el Tribunal en la primera sentencia realiza la siguiente argumentación en el FJ4:

(...) recordemos que el artículo 61 del Decret Legislatiu 3/2003, lo define como "impuesto con finalidad ecológica", y se declara compatible con la imposición de contribuciones especiales, y con la percepción de tasas o tarifas por los entes locales en materia de saneamiento, que deben respetar lo dispuesto en la ley en cuanto al principio de recuperación de costes y el marco tributario existente entre las diversas Administraciones Públicas.

El canon del agua se perfila en el Decret Legislatiu 3/2003, como un tributo finalista. En concreto, el artículo 63 establece que los ingresos que genere se afectarán a:

La prevención en origen de la contaminación y la recuperación y el mantenimiento de los caudales ecológicos.

La consecución de los otros objetivos de la planificación hidrológica, y particularmente de la dotación de los gastos de inversión y explotación de las infraestructuras que se prevean.

Los otros gastos que genere el cumplimiento de las funciones que se atribuyan a la ACA.

A partir de lo anterior, y tras repasar el hecho imponible del canon del agua descrito en el artículo 64 de la misma norma legal, deduce de la circunstancia de que el artículo 74.4 del Decret Legislatiu 3/2003 le permita acogerse voluntariamente, evitando por tanto el sistema previsto en el artículo 71.4, al sistema de determinación objetiva de la cuota basado en la potencia instalada en el establecimiento y en la energía producida

expresada en kW/h, que el canon del agua no tiene la finalidad confesada por la ley, sino que tiene como única finalidad la de gravar la propia actividad productiva, lo que desde luego no resulta aceptable por dos motivos. El primero por cuanto la actora parece partir de la premisa errónea de que el carácter finalista del tributo tiene únicamente relación con el componente contaminante, cuando ello no es así, pues también lo tiene, por ejemplo, con el control del mantenimiento del caudal ecológico de los cauces, aspecto en el que la construcción de una central hidroeléctrica y su funcionamiento, puede incidir claramente. Y en segundo lugar, en una total falta de actividad probatoria para cada una de las centrales hidroeléctricas a que se refiere el presente procedimiento. En efecto, la actora impugnó ante la Junta de Finances, y esta resolvió conjuntamente un total de 43 liquidaciones referidas a diversas centrales hidroeléctricas, respecto de las cuales se desconocen aspectos como la infraestructura de las mismas, su localización exacta, o si su construcción o explotación ha requerido alguna actuación ambiental por parte de la Administración Pública en materia de accesos, impacto ambiental etc. Y es que, como dice la STS de 29 de enero de 2003 (rec 5575/1998), "una central hidroeléctrica o un salto de agua es, en principio, impensable sin un embalse y tal embalse no es, obviamente, de manera total, un fenómeno espontáneo de la naturaleza, sino un producto de una obra de ingeniería", todo ello con unas claras consecuencias sobre el medio ambiente.

En definitiva, no puede la actora deducir una finalidad del tributo contraria a la expuesta por la norma que lo regula de una opción voluntaria para la determinación de su cuota tributaria.

Las siguientes pretensiones también son desestimadas, la cual cosa argumenta en los FFJJ 5 y 6. Los otros dos recursos tienen las mismas pretensiones y son desestimados en los mismos términos.

Sumari: 1. Una visió general; 1.1. Planejament urbanístic i avaluació ambiental; 1.2. Els instruments econòmics ambientals, en especial el cànon de l'aigua

1. UNA VISIÓ GENERAL

Durant aquest període el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) s'ha pronunciat en diverses sentències en les quals s'han dirimit qüestions relacionades amb el medi ambient, resolent recursos contenciosos administratius i recursos d'apel·lació. Especialment destaquen en el marc dels recursos contenciosos administratius els àmbits de la intervenció administrativa, com són la planificació urbanística vinculada a l'avaluació ambiental i els instruments econòmics ambientals, en particular, el cànon de l'aigua.

Durant aquest període també trobem nombroses sentències en les quals es dirimeix sobre les associacions cannàbiques al municipi de Barcelona⁴. No obstant això, com que en cròniques anteriors ja vam analitzar sentències similars i en tractar-se més de qüestions urbanístiques que estrictament ambientals, hem considerat oportú no analitzar-les. El mateix passa amb les nombroses sentències del mateix municipi que trobem en relació amb els conflictes amb llicències i usos turístics⁵. Finalment, trobem sentències relatives a mesures cautelars per manca d'autorització i suspensió de llicència ambiental que resolen recursos d'apel·lació que referenciem però que no hem considerat prou rellevants per comentar-les⁶.

1.1. Planejament urbanístic i avaluació ambiental

En aquest espai volem destacar les sentències en les quals el Pla Urbanístic s'ha declarat nul o s'ha pretès la seva nul·litat per manca o per vici en l'avaluació ambiental a la qual s'ha de sotmetre. Volem fer especial referència a dues

⁴ Referenciem les sentències a continuació per si són d'interès: STSJC número 311/2019 de 8 d'abril; 426/2019, de 14 de maig; 437/2019, de 21 de maig; 465/2019, de 27 de maig; 495/2019, de 4 de juny; 562/2019, de 17 de juny; 567/2019, de 17 de juny, i 586/2019, de 25 de juny.

⁵ Les sentències pronunciades sobre aquesta qüestió en aquest període són: STSJC número 313/2019, de 8 d'abril; 427/2019, de 14 de maig; 466/2019, de 27 de maig; 496/2019, de 4 de juny; 451/2019, de 21 de maig; 544/2019, de 12 de juny; 613/2019, de 28 de juny, i 684/2019, de 9 de juliol.

⁶ Es tracta de les STSJC número 310/2019, de 5 d'abril; 344/2019, de 18 d'abril; 40172019, de 7 de maig; 622/2019, de 3 de juliol.

sentències que dirimeixen sobre l'aprovació definitiva de modificació del POUM d'Alcover per considerar-les rellevants en analitzar les figures de planejament, tant el d'ordenació urbanística municipal com el pla territorial parcial, així com la institució de l'avaluació ambiental. Finalment, comentarem una sentència en la qual es considera que l'avaluació ambiental és adequada a la legalitat.

Les sentències número 534/2019 i 535/2019, d'11 de juny, resolen recursos contenciosos administratius interposats contra la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament d'Alcover, contra l'Acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Tarragona, de 29 de novembre de 2012, que aprova definitivament el POUM d'Alcover, i contra la Resolució del director general d'Ordenació del Territori i Urbanisme de data 14 de gener de 2013, en el qual es dona conformitat al text refós del POUM esmentat, en què es demana la declaració de la nul·litat d'aquests actes i es deixen sense efecte en tot allò que es refereix al sector de la Romiguera, perquè no és conforme a dret. L'aprovació del POUM pretenia canviar l'ús ecològic d'una zona d'ús extractiu, amb l'agreujant que l'activitat extractiva ja s'exercia anteriorment.

El primer recurs incideix més que el segon en els incompliments en el procés d'avaluació ambiental corresponent a l'ampliació de l'àrea extractiva en el sentit següent, en el FJ 2:

II. INCOMPLIMENTS EN EL PROCÉS D'AVALUACIÓ AMBIENTAL CORRESPONENT A L'AMPLIACIÓ DE L'ÀREA EXTRACTIVA. [...]

[...] s'entén, que, pel que fa a la legislació sectorial, l'ampliació de la pedrera requereix un estudi d'impacte ambiental, que plantegi alternatives de creixement . [...]

Es considera que, donada la magnitud de l'ampliació proposada, que és de 64,03 ha respecte de les 84,75 ha existents, que en total sumen una extensió de 148,78 ha, l'ISA hauria d'haver proposat alternatives de creixement que valoressin de forma preliminar la comparativa dels afectacions que aquestes alternatives ocasionen al medi. Les alternatives han d'estudiar els aspectes més significatius per al medi ambient, com són les possibles ubicacions en l'ampliació, els efectes que té una extensió més gran o més petita, la programació de l'ampliació per fases i la seva viabilitat econòmica, la distància a nuclis de població i les seves possibles afectacions, etc.

Tanmateix, cal afegir que si bé és cert que l'ISA de la segona aprovació inicial, a l'apartat 5, "Sensibilitat ambiental", analitza la sensibilitat ambiental dels terrenys objecte d'ampliació de l'àrea extractiva, no en considera les conclusions que n'extreu, perquè la major part del sector d'ampliació situat al sud de l'actual, és considerada com a zona d'elevada sensibilitat ambiental i/o com a zona de sensibilitat mitjana. Es considera correcta aquesta valoració feta per l'ISA, ja que aquests terrenys corresponen a la conca del torrent del Ferreró (vegeu plànol 3 acompanyat).

Per tant, i en conclusió, s'han d'estudiar altres alternatives i, en tot cas, desclassificar tota la zona sud del torrent del Ferreró com a zona d'ampliació de la Pedrera, perquè és una zona de connexió ecològica, entre altres motius objectivables que s'esmenten en les alegacions següents.

En definitiva, es considera que no s'han estudiat prou les alternatives a l'ampliació de la zona extractiva a més que la zona en la qual es pretén dur a terme l'ampliació és una zona de connexió ecològica que requereix continuar amb aquest ús i, per tant, no procedeix canviar l'ús a extractiu.

En la contestació de la demanda, la Generalitat de Catalunya defensa el canvi d'ús, considerant que és conforme a la legalitat alegant el que segueix en el FJ2:

- en alegacions a la informació pública del POUM la titular de l'explotació codemandada instava que es tingués en compte que tenia en tramitació a l'Administració sectorial competent en mines una petició per ampliar-la;
- entre els informes sectorials a la primera aprovació inicial del POUM n'hi havia un de desfavorable del Departament d'Economia i Finances (Serveis Territorials a Tarragona), segons el qual, de la regulació de les activitats extractives que contenia el POUM se'n desprenia una prohibició genèrica, contrària a l'article 122 de la Llei de mines, de noves activitats extractives, així com de l'ampliació de les existents, havent de permetre la normativa del POUM totes dues possibilitats;
- l'informe de l'Oficina de Gestió Ambiental Unificada estima que l'ampliació de la zona d'explotació no comporta un augment de l'impacte ambiental de l'activitat, similar al provocat per l'actual explotació, i que l'ampliació no se situa dins de cap espai inclòs al PEIN, ni a la Xarxa Natura 2000;
- es va emetre igualment l'informe d'adequació del POUM al planejament territorial pel Departament de Territori i Sostenibilitat;

- els terrenys on es preveu la possibilitat d'ampliar la pedrera es qualifiquen amb la clau 26a-“ús extractiu, ampliació”, que es troba regulada en l'article 186;
- el POUM es va sotmetre al procediment preceptiu d'avaluació ambiental estratègica;
- inadmissibilitat del recurs per manca d'acreditació de la capacitat processal del consistori recurrent, en no haver decidit exercir l'acció el Ple de la Corporació, o l'alcalde, i no haver-se emès l'informe jurídic previ preceptiu pel secretari municipal, de l'Assessoria Jurídica, o d'un lletrat;
- el POUM d'Alcover s'ajusta al Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona (d'ara endavant, si escau, PTPCT): el POUM es limita a atorgar als terrenys una determinada qualificació urbanística, però l'ampliació pròpiament dita de l'activitat extractiva requereix, en tot cas, les preceptives autoritzacions sectorials, minera, ambiental integrada, i urbanística; l'article 2.18 de les Normes d'ordenació del PTPCT preveu expressament que en els sòls de protecció especial cal autoritzar noves activitats extractives i ampliacions de les que ja s'han autoritzat sempre que no afectin de manera clara i definitiva els valors que han motivat la protecció especial o territorial del conjunt de l'espai; l'instrument adequat per valorar si es dona o no la condició és l'acte d'autorització de l'activitat o projecte en qüestió; en el procés d'avaluació ambiental estratègica del POUM ja s'han identificat les repercussions ambientals de la clau urbanística en litigi, des de la perspectiva pròpia d'aquesta fase de planejament, i s'ha descartat que hi hagi una afectació clara i definitiva dels valors que motiven l'especial protecció per raons d'ordenació territorial;
- estricte compliment del procediment d'avaluació ambiental estratègica del POUM, sense perjudici de la ulterior avaluació ambiental específica del projecte d'ampliació de la pedrera;
- el fet que el planejament territorial catalogui una part dels terrenys com a sòl de protecció especial per raó de la seva connectivitat ecològica no impedeix al POUM atorgar-los la qualificació urbanística impugnada, ni la desvirtua;
- falta d'afectació significativa del valor de connectivitat ecològica dels terrenys: la mera catalogació pel PTPCT dels terrenys com de protecció especial per raons d'ordenació territorial, i concretament per la seva funció connectora, no desvirtua la qualificació urbanística, que es limita a fer-los compatibles amb la possibilitat de la seva destinació a l'ús extractiu, i en seu

de la corresponent autorització sectorial es comprova si el contingut del projecte compleix o no la condició imposada per l'article 2.18 PTPCT; les mesures correctores s'incorporen explícitament a la mateixa normativa del POUM, l'article 186 del qual imposa l'obligació de complir les mesures correctores del document d'informe de sostenibilitat ambiental; el valor territorial de connectivitat ecològica dels terrenys és limitat o residual, fins al punt que la destinació dels terrenys a l'ús extractiu no significaria una afectació significativa del tal valor territorial; els mateixos se situen en una àmplia franja de terreny situada entre dues àrees veritablement connectores, en un dels extrems de la franja intermèdia, just al límit dels terrenys que ja no compleixen tal funció, que no tenen cap valor territorial per aquest motiu; si es fes efectiva la possibilitat d'ampliar la pedrera, quedaria sotmesa per imperatiu legal a la preceptiva obligació de restauració dels terrenys afectats, esgotat l'aprofitament miner, i permetria restaurar els valors territorials i ambientals dels terrenys i en concret el seu valor connector, per la qual cosa no ens trobem davant una afectació definitiva;

-l'avaluació ambiental estratègica del POUM també va examinar favorablement l'impacte paisatgístic de l'ampliació eventual de la pedrera; i

-la qualificació urbanística resulta perfectament compatible amb la protecció dels béns culturals i naturals de la zona.

Els mateixos motius d'inadmissibilitat i desestimació del recurs contenciós administratiu esgrimeix l'Ajuntament codemandat.

La titular de l'explotació demandada també exposa la seva defensa de la legalitat, en el mateix sentit.

La sentència també incorpora els extrems que resulten d'interès de les pericials de designació judicial practicada i que reproduïx els FJ 4, 5 i 6, a les quals ens remetem. El FJ 7 recull els preceptes del Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona que es tenen en compte.

Reproduïm a continuació els FJ 8 i 9, en els quals s'argumenta l'estimació del recurs i, per tant, la declaració de nul·litat de ple dret de l'aprovació definitiva amb prescripcions i conformitat al Text refós del POUM d'Alcover quant a la regulació de l'ús extractiu en ampliació de la pedrera existent, anomenada la Ponderosa, en la superfície de 64,03 ha, clau 26a, així com en l'article 186 de les normes. El Tribunal entén, per tant, que el Pla Territorial vincula el pla derivat i que no permet

aquest canvi d'ús, ja que l'ús ecològic ha de mantenir-se ja que es tracta d'un sòl de protecció especial pel seu valor com a connector, ecològic, i el canvi d'ús afectaria aquest valor ambiental protegit, i que l'avaluació ambiental que s'ha fet no és correcta, ja que les mesures correctores de l'ISA són insuficients i no s'han tingut en compte les afectacions a l'aigua ni els valors ambientals que existeixen que s'han de protegir, així com la funció de connector que exerceix.

VUITÈ. La impugnació que en el present supòsit se'ns sotmet requereix, amb vista al seu enjudiciament, partir de la referència normativa en el precedent fonament portada a literal col·lació, per prendre'n les pautes següents que al POUM li són en el que aquí importa d'aplicació: el sistema d'espais oberts assenyala les parts del territori que cal preservar dels processos que puguin afectar-ne negativament els valors paisatgístics i ambientals; aquest sistema és un component fonamental en l'ordenació del territori, i les determinacions que el regulen són bàsiques en el desplegament del PTPCT; les normes relatives al sistema en el PTPCT són aplicables directament, i executives, des de la seva entrada en vigor, i prevalen sobre el planejament territorial sectorial i urbanístic vigent en tots els aspectes en què puguin ser més restrictives amb relació a la implantació d'activitats que puguin afectar els valors del sòl que en motiven la protecció (la qual cosa no pot entendre's sinó com una clara crida al planejament urbanístic futur, no exclusivament a autoritzacions, com pretén la recorreguda, en virtut del principi de coherència que disciplinen els arts. 3.3 i 13.2 del Decret legislatiu 1/2010, TRLUC, i 11.4 de la Llei 23/1983, de 21 de novembre, de política territorial); és sòl de protecció especial el que pels seus valors naturals i de connectivitat ecològica el Pla considera més adequat per integrar una xarxa permanent i contínua d'espais oberts, que ha de garantir la biodiversitat i vertebrar el conjunt d'espais oberts; en relació amb les actuacions en sòl d'especial protecció que es poden autoritzar a l'empara dels apartats quart i sisè (a què es refereix la titular de l'explotació) de l'article 47 TRLUC, s'entén que són incompatibles amb el sòl totes les actuacions de transformació del mateix sòl que puguin afectar de manera clara els valors que motiven la protecció especial; amb relació a les activitats extractives, es poden autoritzar les ampliacions de les ja autoritzades en sòl de protecció especial sempre que no afectin de manera clara i definitiva els valors que han motivat la protecció especial del conjunt de l'espai protegit; en fi, les propostes de noves activitats extractives han de ponderar des de

l'anàlisi multicriteri els valors naturals i ambientals enfront del valor dels béns miners objecte d'explotació.

L'Ajuntament recurrent, en demanda, posa de manifest que l'ampliació proposada té lloc al torrent d'en Ferreró, que exerceix de connector biològic entre la plana del Camp i l'espai d'interès natural de Muntanyes de Prades, per la qual cosa suposa una barrera que augmentaria la fragmentació del territori i provocaria un aïllament de l'espai natural protegit; que la connectivitat actualment es garanteix seguint la direcció dels cursos de rieres, torrents i barrancs que baixen de la muntanya a la planícia, fent disminuir l'ampliació litigiosa la connectivitat i biodiversitat tant de l'espai protegit com dels espais oberts de la planícia; que, donada la magnitud de l'ampliació proposada degueren proposar-se alternatives de creixement que valoressin de manera preliminar la comparativa d'afectacions que ocasionessin al medi; que si bé és cert que l'informe de sostenibilitat ambiental (d'ara endavant, si escau, ISA) analitza la sensibilitat ambiental dels terrenys objecte d'ampliació, no dedueix conclusions de l'elevada i mitjana sensibilitat ambiental que atribueix al sòl de l'ampliació; que es destruiran hàbitats d'interès comunitari, i que malgrat que el Torrent d'en Ferreró no tingui cabal continu, la seva desaparició afectarà ecosistemes dependents de l'aigua, aigües avall de la font del Mas Roig.

N'hi hauria prou amb el quadre descrit per l'actora, d'acreditar-se, a l'efecte d'arrossegar la nul·litat de la disposició que es discuteix aquí, per contrariar-se clarament les determinacions que per al sòl que ens ocupa, en relació amb la concreta activitat de què es tracta, sentin, sense ànim exhaustiu, els articles 2.7.2, 2.18.2 i 2.18.4 del PTPCT, i seguir-se una avaluació ambiental del Pla inadequada i inidònia a les finalitats que li són pròpies.

Sense perjudici de valorar els arguments despleats en contestació a la demanda per la part recorreguda i els codemandats, el resultat de les dues proves pericials de designació judicial practicades, com més garantia de l'encert de la decisió que ens competeix, no abona sinó les tesis de la part recurrent.

Així, el perit, el Sr. Roque, manté que part de l'ampliació proposada es du a terme al torrent d'en Ferreró, que exerceix de connector biològic entre la Plana del Camp i l'espai d'interès natural de Muntanyes de Prades, inclòs a la Xarxa Natura 2000; que l'ampliació suposaria una barrera que augmentaria la fragmentació del territori, dificultant la connectivitat dels diversos espais naturals protegits establerts en xarxa i la seva connexió cap

als terrenys situats en la plana del Camp de Tarragona; que aquesta és una de les poques zones més àmplies i obertes entre les muntanyes i la plana; que l'ampliació, que intercepta la conca del Torrent d'en Ferreró, vulnera els valors ambientals que han propiciat la seva inclusió del com a sòl d'especial protecció, i augmenta la pressió a les valls veïnes en l'esmentat paper connector, en una zona molt estreta per a la connectivitat ecològica; que la connectivitat entre les Muntanyes de Prades i la Plana és fonamental en la visió del PTPCT, amb vista a la continuïtat física entre els paisatges naturals i els que ha modificat l'ésser humà; que la solució adoptada per l'ISA és hidràulica però no ecològica, i no es pot separar el llit de la vegetació de ribera que l'envolta, i de les zones humides o les planes d'inundació que els complementen; que hi ha un espai d'interès natural i la seva connexió amb la plana s'aprima a causa dels polígons industrials d'Alcover i de la Selva, no fent més que reduir-lo l'ampliació de la zona extractiva; que les anteriors Normes subsidiàries d'Alcover qualificaven el sòl de l'ampliació com a especialment protegit d'interès ecologicambiental, sense, segons les quals, poder acollir utilitzacions que impliquessin transformacions de la seva destinació o naturalesa, amb prohibició de qualsevol activitat extractiva; que el problema radica en la magnitud de l'ampliació de la zona extractiva, desproporcionada; i que les mesures correctores de l'ISA són insuficients, ja que la visió dels espais fluvials no es limita a la zona per on discorre l'aigua. De la credibilitat de les conclusions del perit en dona bon compte l'extensió dels seus raonats arguments; ell mateix es va prestar a respostes exhaustives als aclariments que li van ser sol·licitades per les parts, així com l'avaluada experiència en la formació de les corresponents avaluacions ambientals de diversos instruments de planejament. Més enllà d'això, com es veurà immediatament, i resulta de la mateixa literalitat del seu pericial a dalt portada a col·lació, tenim que l'altre perit designat, a petició de la part codemandada compareguda a iniciativa d'aquest Tribunal, titular de l'explotació, Sr. de Sebastián, no té l'afectació clara, definitiva, i irreversible, de valors que van motivar l'especial protecció territorial del sòl que ens ocupa.

Aquest últim perit, més que moderat en la seva conclusió final, no aporta sinó conclusions que apunten a la irreversibilitat de la negativa afectació a valors ambientals i de connectivitat ecològica del sòl sobre el qual es projecta l'ampliació de la pedrera: així, sosté que en l'àmbit es detecta la presència de fins a quatre hàbitats d'interès comunitari; que l'àmbit presenta

una biodiversitat considerable; que els valors naturals i ambientals de l'àmbit es poden considerar elevats; que el total d'espècies protegides de presència possible és de seixanta; que el valor de la fauna i la flora és alt; que el torrent d'en Ferreró funciona com a connector biològic entre l'espai d'interès natural de les Muntanyes de Prades, inclòs en la Xarxa Natura 2000, i la Plana del Camp; que podent considerar-lo un connector de segon ordre, la seva funcionalitat és significativa; que l'activitat projectada suposarà una profunda transformació del paisatge i de l'ecosistema, modificarà el relleu i els fluxos d'aigua, els sediments i els nutrients, i desapareixerà el sòl de forma pràcticament total, amb els seus components, així com la vegetació i gran part de la fauna; que el caràcter de l'impacte esmentat serà permanent, perquè el programa de restauració no permetrà la recuperació de la integritat d'alguns dels elements principals del paisatge associats al relleu actual; que dos dels hàbitats d'interès comunitari seran parcialment destruïts, inclòs el sòl i la morfologia del terreny en el qual s'assenten; que quan cessi l'activitat, fins i tot aplicant el programa de restauració estrictament (després, en l'escenari més favorable per a la posició de recorreguda i codemandats), els ecosistemes o els hàbitats, per la seva complexitat, difícilment es podran reconstruir a partir de zero; que el resultat serà un paisatge nou, amb unes plataformes de grans dimensions en què els cingles que flanquegen el torrent hauran estat rebaixats a cotes significativament més baixes; que en cessar l'activitat, i completat el programa de restauració, no serà possible recuperar els ecosistemes o hàbitats previs; i que el resultat serà un mosaic de sectors, alguns severament alterats, que reduiran dràsticament la permeabilitat ecològica del connector; és previsible que, a la restauració, recuperi part (no tota) de la seva funcionalitat.

Mereixedora igualment de crèdit l'esmentada pericial, de resultat no discrepant, en el cos i argumentació, de fet, amb la primera, tenim que l'afectació clara i definitiva als valors que motiven l'especial protecció territorial concorre, sense venir a posar-hi remei íntegre i total una eventual restauració, simultània o successiva a l'explotació. No desconeixem el tenor de les respostes als aclariments plantejats, en el sentit que va interessar a la part que les va proposar, pel perit, en escrit de data 27 d'octubre de 2017, més del mateix no estimem una refutació de les conclusions anteriors, en la mesura que les breus respostes consignades no contradiuen l'absoluta incertesa d'una reconstrucció dels valors essencials i característics dels hàbitats afectats, ni l'impacte sobre el paisatge, en el que a la significativa

rebaixa de cota dels cingles i modificacions profundes del relleu a conseqüència de l'activitat extractiva es refereix. En suma, caracteritzades amb detall pel perit, Sr. de Sebastián, les afeccions als valors ambientals i de connectivitat de l'àmbit d'ampliació, la seva significació, i la seva impossible reversió, en un horitzó divisible, en extrems en res accidentals, les breus respostes als aclariments demanats no deixen de revelar-se opinions que, per més que complaents amb la posició de la part que les planteja, no desvirtuen gens en nucli de la perícia, i els impactes que s'hi descriuen.

Del resultat probatori del qual no ha d'entendre's sinó digna d'estimació la pretensió de nul·litat articulada en l'escrit de demanda.”

NOVÈ. Abordant les raons desplegades per les adverses, i començant per les articulades per la Generalitat de Catalunya, en contestació a la demanda, hem d'assolir les conclusions següents:

Que la zona d'ampliació no es trobi enquadrada en cap espai d'interès natural, ni a la Xarxa Natura 2000, no desvirtua la seva condició de sòl d'especial protecció territorial, amb el règim tuïtiu dels valors que se li associen, i ens trobem, de fet, amb un sòl que exerceix funcions de corredor ecològic al servei d'espai d'interès natural integrat a la Xarxa.

El POUM es diu sotmès a un procés d'avaluació ambiental estratègica de la idoneïtat i la suficiència de la qual, amb les finalitats de justificar l'ordenació aprovada per al nostre àmbit d'ampliació d'ús extractiu, cal dubtar amb fonament, a la vista del resultat de la pericial practicada, obra del Sr. Roque. Així, ell mateix ha posat de manifest que no es plantegen alternatives d'ampliació a zones de protecció preventiva, en el seu cas compatibles amb l'ús proposat; que l'ISA es limita a fer una relació de possibles efectes significatius, sense valorar-los en deguda manera; que falta una anàlisi d'alternatives exhaustiva, que valori la comparativa d'afectacions que les alternatives esmentades ocasionin al medi, per a una afectació superficial superior a les vint-i-cinc hectàrees (aquí són seixanta-quatre); que en cap document es valora o intenta justificar l'absència d'afectació clara i definitiva a valors que van justificar l'especial protecció territorial; que l'ISA es limita a una relació d'efectes significatius del pla sobre el medi ambient, sense interrelacionar els aspectes amb incidència ambiental; que entre el primer i el segon ISA hi ha contradiccions. El primer determina com a severa la

incidència d'una petita ampliació de la zona extractiva en l'alternativa de model 4, i el segon ISA no ho fa així, per a l'ampliació que ens ocupa, que suposa, de fet, quasi duplicar l'extensió superficial de l'explotació minera; que la contradicció amb l'ISA inicial es dona en conceptes molt sensibles pel que fa l'ampliació, com ara "prats basòfils", "connector", "recursos fluvials", "paisatge", "criteris ambientals i objectius" o "alternatives"; que el segon ISA no avalua l'impacte, a diferència del primer, que estudia diverses alternatives; o que en ocasió de l'avaluació ambiental del projecte tècnic de l'ampliació només es valoraran alternatives internes. De la pericial de la qual col·legim, sens dubte, que l'avaluació ambiental del POUM, pel que fa a l'ampliació litigiosa, no ha complert la seva funció, s'inhibeix d'un estudi rigorós d'alternatives d'ampliació per centrar-se, exclusivament, en una relació dels efectes de la ubicació ja decidida per a aquesta, i de previsió de mesures correctores, més propi, aquest contingut, de la seu d'avaluació d'impacte ambiental de l'activitat.

De fet, de la lectura de l'informe a la segona aprovació inicial, emès per l'Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental (folis 4558 i s. de l'expedient administratiu), tenim que, reconegut que tota la zona queda englobada a l'àrea d'interès faunístic o florístic, s'apel·la a les mesures correctores que inclou l'ISA, revelades insuficients, estipulades, com a retret més gran, pel Departament competent en matèria d'agricultura i ramaderia, allí on les mateixes haurien de reconduir-se al competent en matèria ambiental. En aquell temps, ja l'informe troba a faltar una "avaluació en l'àmbit municipal de les activitats extractives, amb la corresponent valoració d'alternatives", justament el principal retret dirigit a l'avaluació ambiental del POUM pel perit Sr. Roque.

En la contestació de l'Administració autonòmica es repeteix, fins a la sacietat, un argument quasi obsessiu: que el POUM no implanta o il·lumina cap activitat, sinó que preveu una qualificació que la fa simplement possible, i s'ha de diferir l'exhaustiva avaluació ambiental a la seu d'autorització de l'activitat. L'argument no mereix la consideració d'aquesta Sala, en la mesura que, en seu de planejament, per descomptat, ha de practicar-se una avaluació ambiental que informi degudament la labor del planificador, a qui correspon decidir, ni més ni menys, que una qualificació que ha de permetre activitats com la que ens ocupa, allí on hi ha d'haver diverses opcions, i no es deu sinó a un exercici de la potestat respectuós amb l'ordenació territorial, d'entrada, la qual cosa aquí no ha esdevingut. Ho direm en altres paraules:

no cal inhibir l'avaluació ambiental pròpia del planejament per deferir-la a la seu d'una autorització ja reglada, en què constituirà element central l'avaluació de l'impacte de l'activitat en una determinada ubicació, no una altra, amb vista a minimitzar-lo. Així, a tots dos perits ha resultat perfectament plausible una anàlisi de les conseqüències ambientals de la decisió planificadora que es discuteix aquí a la vista de l'ordenació aprovada, conseqüències radicalment incompatibles amb la disciplina territorial marcada pel PTPCT, la qual cosa al planificador, si hagués exercit rectament la seva potestat, li hauria resultat igualment assequible.

De les pericials practicades n'han resultat igualment refutades les invocacions de la recorreguda a trobar-nos davant una falta d'afectació significativa al valor de connectivitat ecològica dels terrenys; al tret residual del valor territorial de connectivitat (argument aquest, per cert, que suposa qüestionar de manera impròpia la virtualitat mateixa d'una ordenació territorial que es revela molesta a l'efecte de defensar la legalitat del POUM); o fins i tot a permetre la restauració, esgotat l'aprofitament miner, restaurar els valors territorials i ambientals dels terrenys, i en concret el seu valor connector.

En fi, en valorar la representació autonòmica, el resultat de la segona de les pericials practicades en les actuacions, aquesta qüestiona que en cessar una activitat extractiva pugui retornar-se el sòl a la seva situació original, cosa que s'ha d'entendre consubstancial a qualsevol activitat de tal naturalesa. Al que bé podrà oposar-se que, informada com ho està sobre aquest tema aquesta Sala, coneixedora de la realitat i de les conseqüències d'explotacions com la d'actuacions, l'ordenació territorial demanda respecte, en els termes estrictes, així que les afectacions derivades de l'activitat, al seu cessament i restauració, gràcies a les pericials practicades, de cap manera poden estimar-se sinó significatives, amb incidència substancial i nuclear inqüestionable en els valors del nostre àmbit, inclòs el connector, que en part no menyspreable haurien de quedar irremeiablement desnaturalitzats.

El segon recurs, que té el mateix objecte que el recurs anterior, considera que l'activitat extractiva que es du a terme en aquests terrenys és il·legal i que s'ha promogut la modificació del pla per "legalitzar" l'activitat canviant l'ús del sòl qualificat d'especial protecció on es prohibeix l'ús extractiu a ús extractiu. Es considera, a més, que l'activitat que s'exerceix està emparada per una llicència

ambiental nul·la de ple dret “en permetre l’exploració minera en uns terrenys no compatibles amb l’ús extractiu, qualificats com a sòl especialment protegit d’interès ecològic ambiental per les NS d’Alcover i catalogats pel Pla Territorial Parcial de Tarragona (com es veurà més endavant) com a sòl de protecció especial.” També s’al·lega que el Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona aprovat definitivament el 12 de gener de 2010 cataloga l’àmbit del POUM de la zona de la Romiguera objecte d’ampliació de la pedrera com a sòl de protecció especial (meitat occidental) i com a sòl de protecció preventiva, espais d’interès connector (sector est). També s’al·leguen infraccions quant a l’avaluació ambiental del pla.

La part demandada, no obstant això, considera que l’aprovació del pla és correcta.

L’Alt Tribunal basa la seva anàlisi en la qüestió relativa al planejament urbanístic, és a dir, al POUM, que és l’objecte del recurs, i per això es refereix a una sentència prèvia al·legant això: “Tals extrems han estat abordats en sentència d’aquesta Sala i Secció, recaiguda en el recurs seguit a la mateixa Sala amb el número 28/2013, contra idèntic instrument de planejament, del dia de la data, segons un patrimoni probatori del qual es va donar trasllat oportú a les parts, per a al·legacions, per provisió d’aquesta Sala, de data 2 d’octubre de 2018.” Es reproduïx gairebé la integritat de la sentència, en els fragments que li interessa, a la qual es remet per arribar a la conclusió següent, exposada en el FJ5:

Dels raonaments anteriors flueix diàfana la concurrència en el POUM de vicis determinants de la seva nul·litat, corroborant potser la conclusió d’una indeguda avaluació ambiental del POUM, almenys pel que fa a l’àmbit litigiós es refereix, la mateixa pericial de la qual es valen aquí els actors, obra del Sr. Lorenzo, acompanyada a l’escrit de demanda, segons la qual, en el que aquí importa:

“Un dels aspectes en què IISA fa especial èmfasi és la connectivitat ecològica (pàgines de la 88 a la 94). El municipi d’Alcover, al límit de les Muntanyes de Prades, té un enclavament especial per garantir la connectivitat ecològica entre aquest espai natural i la plana del Camp de Tarragona. A través de torrents i rius com el Glorieta, es vehicula aquesta connectivitat tan (sic) necessària per garantir la pervivència dels ecosistemes naturals de la zona.

Si b  IISA detalla els diversos elements que poden limitar aquesta connectivitat (carreteres, urbanitzacions, vies de tren, etc.), no es parla de l'efecte devastador sobre la connectivitat que fa la pedrera i tota la seva  rea. LISA aporta la informaci  sobre connectivitat que el Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona va posar sobre la taula despr s de l'aprovaci  definitiva el 2010. [...] Fer aquestes consideracions objectives sobre la base del Pla Territorial, per  despr s considerar possible l'ampliaci  de la pedrera de la Ponderosa, entenem que no te sentit i resta coher ncia a IISA. [...]

[...] IISA exposa l'impacte de les activitats extractives sobre el municipi. Despr s d'una relaci  dels pedreres abandonades i les que actualment estan en actiu i que, per tant, s n susceptibles de generar algun tipus d'impacte, hi ha una mancan a molt greu de detall de quins s n els impactes generats. [...]

[...] la mem ria tampoc inclou en l'an lisi d'alternatives, l'opci  d'ampliaci  de la Ponderosa (p gina 32).

Tota aquesta an lisi de la mem ria ens porta a constatar que no hi ha hagut cap adaptaci  dels documents de la mem ria corresponents a la primera aprovaci  inicial. El text ref s presentat no difereix gaire de la primera proposta i no incorpora el canvi principal: l'ampliaci  de la pedrera de la Ponderosa. Aix  doncs, afirmem que la mem ria presentada  s inv lida, esbiaixada i presenta greus d ficits de contingut, ja que en menysprear l'ampliaci  de la pedrera en diversos (sic) cap tols, no preveu els possibles efectes d'aquesta sobre la resta de planejament i ordenaci  del municipi. Tan sols en trobem una breu refer ncia a la p gina 56, quan es descriu la clau 26 i 26a del SNU. [...]

[...] 3.3. Annex a l'Informe de sostenibilitat ambiental del POUM d'Alcover [...]

[...] L'objecte d'aquest annex  s, com s'indica a la p gina 5, canviar la catalogaci  de l' rea de l'ampliaci  de la pedrera, de s l rural i s l d'inter s ecol gic i paisatg stic, a s l per a  s extractiu. Malgrat tot, no hi ha una justificaci  argumentada per a aquest canvi de catalogaci . Els valors que al seu dia van motivar l'inter s ecol gic i paisatg stic continuen vigents abans com ara, el document no contraposa la situaci  passada amb l'actual, de manera que es pugui comprendre una rebaixa dels valors ambientals de la zona.

Novament, com ja s'ha vist en altres documents ambientals del POUM, l'annex a IISA destaca que l'espai on s'ha de fer l'ampliaci  de la pedrera  s

important pel que fa a la connexió ecològica (pàgina 8 i pàgines 30 i 31), fet que va justificar que el Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona delimités la zona com a sòl de protecció especial”

Com es veu, la pericial de què es valen els recurrents en les presents actuacions presenta retrets a l'avaluació ambiental del POUM, a la qual s'atribueix incoherència en no preveure en deguda manera l'efecte o impacte sobre la connectivitat ecològica de l'àrea, que es reconeix i descriu, de l'activitat extractiva; no estudiar rigorosament alternatives quant a l'ampliació litigiosa; i l'absència de justificació d'un canvi de qualificació allí on l'anterior atenia l'interès ecològic i paisatgístic de l'àmbit en lliça.

Després, de la prova practicada en les presents actuacions en resulta novament acreditada la insuficiència i inidoneïtat de l'avaluació ambiental del POUM, almenys pel que fa a la clau d'ampliació d'ús extractiu litigiosa. Per totes aquestes raons, afegides a les que es relacionen en el fonament precedent, no ha d'estar-se sinó a l'estimació del recurs contenciós administratiu, quant a la pretensió de nul·litat del POUM pel que fa a la regulació de l'ús extractiu en ampliació de pedrera existent, clau 26a, segons caldrà veure en la resolució.

En definitiva, s'estima el recurs i declara nul·la de ple dret quant a la regulació de l'ús extractiu en l'ampliació de pedrera existent, anomenada la Ponderosa, en la superfície de 64,03 ha, clau 26a, així com a l'article 186 de les normes.

La tercera sentència que analitzem en aquest apartat, en canvi, desestima la pretensió de la part actora. La Sentència número 316/2019, de 8 d'abril, resol un recurs contenciós administratiu que té per objecte l'Acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central, de 3 de març de 2016, d'aprovació definitiva de la Modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana del municipi de Sant Fruitós de Bages, per adaptar a la Llei 16/2009, de centres de culte (d'ara endavant, si escau, MPPGO). S'impugna la modificació de l'article 96, que permet l'ús religiós en àrees de sòl industrial —clau 6— en l'àmbit definit pel pla d'ordenació de la MPPGO, que es concreta únicament en un polígon industrial del municipi, la Bòbila. S'al·leguen diverses vulneracions, entre les quals, que en la MPPGO no s'ha seguit l'obligació d'elaborar un informe de sostenibilitat ambiental preliminar, d'acord amb la Llei 6/2009, d'avaluació ambiental de plans i programes. Després que el perit practiqués la prova i s'analitzessin els diversos extrems i pretensions que es plantegen, el tribunal

decideix desestimar el recurs. En el que ens concerneix, esgrimeix en el FJ 6 l'argumentació següent:

En fi, es reserva un mínim apartat de l'escrit de demanda (dos paràgrafs al foli 134 de les interlocutòries, apartat 1.9 de l'anomenat fet primer de l'escrit) per denunciar la que es qualifica de vulneració de l'article 86 bis del TRLUC. Segons el qual, "l'avaluació ambiental dels instruments de planejament urbanístic que hi estiguin sotmesos xa d'acord amb la legislació en matèria d'avaluació ambiental de plans i programes s'integra en el procediment d'elaboració dels plans urbanístics, de conformitat amb la present llei i amb el reglament que la desplega" (apartat primer). Si la part actora no posa en absolut l'al·legat en relació amb la legislació en matèria d'avaluació ambiental de plans i programes, per posar de manifest en virtut de quina concreta previsió normativa entenia la modificació de planejament general de què es tracta subjecta a una avaluació ambiental no observada, el motiu d'impugnació apareix insuficientment desplegat. Aquest Tribunal va negar a la part codemandada, no a l'actora, la pregunta a l'arquitecta municipal sobre la no subjecció de la MPPGO a avaluació ambiental de plans i programes, per entendre la qüestió, en els termes en què es formulava, de pur dret, a la qual cosa aquí podem afegir que, vista la insuficient tècnica impugnatòria observada per l'actora, sense versar en cap cas la prova pericial proposada per aquesta sobre l'impacte o repercussió ambiental de la MPPGO, i atenint-se aquesta Sala al que informa l'arquitecta municipal sobre el contingut de la MPPGO, en el sentit de no implicar l'ús admès un impacte més gran sobre les persones i altres activitats que la resta dels admesos, no podem tenir per prou al·legada, ni acreditada, al marge del que s'ha exposat anteriorment, esquiva la legislació sobre avaluació ambiental de plans i programes en l'elaboració de la MPPGO.

En últim lloc, exposem la Sentència número 401/2019, de 7 de maig, que resol el recurs d'apel·lació contra la Sentència número 253, de data 26 de setembre de 2017, que desestimava aquest recurs. En aquest cas, es tracta d'un pla especial que es considera nul perquè faltava la corresponent avaluació ambiental, la qual cosa també comporta la nul·litat dels actes administratius derivats d'aquest pla. D'aquesta sentència en cal destacar el FJ 5, que afirma això:

No obstant això, el que s'ha dit fins aquí, com les parts coneixen, en haver-ho estat també en el recurs ordinari abans esmentat com a seguit en aquesta mateixa Secció amb el número 243/2015, va recaure en ell la ja esmentada Sentència número 57, de 28 de gener de 2019, que ha estat declarada ferma per diligència d'ordenació de la lletrada de l'Administració de Justícia del 30 d'abril passat, en la qual es va anul·lar el pla especial per implantar aquest mateix circuit per manca de la corresponent avaluació ambiental estratègica. El que és determinant de la nul·litat de la llicència atorgada a la seva empara, perquè l'article 47.4 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, Text refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, permet que el sòl no urbanitzable pugui ser objecte d'actuacions específiques per destinar-lo a les activitats o els equipaments d'interès públic que s'hagin d'ubicar al medi rural (entre els quals els destinats a activitats col·lectives de caràcter esportiu, cultural, d'educació en el temps lliure i d'esbarjo que es duguin a terme a l'aire lliure, amb les obres i instal·lacions mínimes i imprescindibles per a l'ús de què es tracti), exigint el 48.1 que tant el projecte com el pla especial urbanístic a aquest efecte formulat reuneixin determinades condicions que en el cas del pla especial, com va declarar la sentència ferma indicada, no es van donar, la qual cosa deixa sense cobertura jurídica suficient la llicència d'actuacions, que per això ha de ser anul·lada.

Per tant, la nul·litat del pla especial per manca d'avaluació ambiental arrossega la nul·litat de la llicència objecte del recurs.

1.2. Els instruments econòmics ambientals, especialment el cànon de l'aigua

Durant aquest període, el TSJC ha resolt diversos recursos contenciosos administratius relatius a tributs i a instruments econòmics de caràcter ambiental. Volem destacar particularment les tres sentències en les quals s'ha analitzat el cànon del aigua. Es tracta de les SSTSJC número 562/2019, de 20 de juny; 570/2019, de 21 de juny, i 615/2019, de 4 de juliol. En els tres recursos s'analitza la naturalesa d'aquest cànon de l'aigua creat com a ingrés específic de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) amb la naturalesa jurídica declarada d'impost amb finalitat ecològica, que afecta l'ús de l'aigua facilitada per les entitats subministradores i la procedent de captacions d'aigües superficials i subterrànies

la gestió de les quals correspon a l'ACA. En el primer recurs es qüestiona aquesta naturalesa en les instal·lacions per produir energia hidroelèctrica. També es considera que vulnera el dret comunitari europeu, en concret la Directiva de responsabilitat mediambiental (2004/35/CE i la Directiva 23000/60/CE, ja que no hi ha danys contaminants. També s'al·lega la inconstitucionalitat del tribut per haver vulnerat els articles 133.2 CE i apartats 2 i 3 de l'article 6 de la LOFCA.

Pel que fa a la naturalesa del tribut, el Tribunal, en la primera sentència, en el FJ4 fa l'argumentació següent:

Recordem que l'article 61 del Decret legislatiu 3/2003 el defineix com a "impost amb finalitat ecològica", i es declara compatible amb la imposició de contribucions especials, i amb la percepció de taxes o tarifes pels ens locals en matèria de sanejament, que han de respectar el que disposa la llei quant al principi de recuperació de costos i el marc tributari existent entre les diverses administracions públiques.

El cànon de l'aigua es perfila en el Decret legislatiu 3/2003, com un tribut finalista. En concret, l'article 63 estableix que els ingressos que generi es destinen a:

La prevenció en origen de la contaminació i la recuperació i el manteniment dels cabals ecològics.

La consecució dels altres objectius de la planificació hidrològica, i particularment de la dotació de les despeses d'inversió i explotació de les infraestructures que es prevegin.

Les altres despeses que generi el compliment de les funcions que s'atribueixin a l'ACA.

A partir del que s'ha exposat anteriorment, i després de repassar el fet imposable del cànon de l'aigua descrit en l'article 64 de la mateixa norma legal, dedueix de la circumstància que l'article 74.4 del Decret legislatiu 3/2003 li permet acollir-se voluntàriament, i evitar, per tant, el sistema previst en l'article 71.4, al sistema de determinació objectiva de la quota basat en la potència instal·lada en l'establiment i en l'energia produïda expressada en kWh, que el cànon de l'aigua no té la finalitat confessada per la llei, sinó que té com a única finalitat gravar la pròpia activitat productiva, la qual cosa, per descomptat, no resulta acceptable per dos motius. El primer perquè la part actora sembla que parteix de la premissa errònia que el caràcter finalista del

tribut té únicament relació amb el component contaminant, quan això no és així, perquè també el té, per exemple, amb el control del manteniment del cabal ecològic dels llits, aspecte en el qual la construcció d'una central hidroelèctrica i el seu funcionament, pot incidir clarament. I en segon lloc, en una total falta d'activitat probatòria per a cadascuna de les centrals hidroelèctriques a què es refereix el present procediment. En efecte, la part actora va impugnar a la Junta de Finances, la qual va resoldre conjuntament un total de 43 liquidacions referides a diverses centrals hidroelèctriques, respecte de les quals es desconeixen aspectes com la seva infraestructura, la localització exacta, o si la construcció o l'explotació ha requerit alguna actuació ambiental per part de l'Administració pública pel que fa a 'accessos, impacte ambiental, etc. I és que, com diu la STS de 29 de gener de 2003 (rec 5575/1998), "una central hidroelèctrica o un salt d'aigua és, en principi, impensable sense un embassament, i tal embassament no és, òbviament, de manera total, un fenomen espontani de la naturalesa, sinó un producte d'una obra d'enginyeria", tot això amb unes conseqüències clares en el medi ambient.

En definitiva, la part actora no pot deduir una finalitat del tribut contrària a la que exposa la norma que el regula d'una opció voluntària per a la determinació de la quota tributària.

Les pretensions següents també són desestimades, cosa que argumenta en els FJ 5 i 6. Els altres dos recursos tenen les mateixes pretensions i són desestimats en els mateixos termes.